



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

CAF 4560/2021: “BRIDGESTONE ARGENTINA SAIC c/ EN-AFIP s/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA”

En Buenos Aires, a de diciembre de 2024, se reunieron en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer sobre los recursos de apelación interpuestos en los autos **“BRIDGESTONE ARGENTINA SAIC c/ EN-AFIP s/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA”**, contra la sentencia definitiva dictada en autos. El Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti dijo:

1º) Que el señor juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda que, en los términos del art. 81 de la ley 11.683, promovió Bridgestone Argentina SAIC (en adelante BAS) contra la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva (AFIP-DGI). En consecuencia, ordenó al ente fiscal que devolviera la suma de \$9.457.243,60, con más intereses hasta la fecha del efectivo pago, que la actora había abonado en forma indebida en concepto de impuesto a las ganancias (en adelante IG), respecto del ejercicio fiscal 2012, en tanto constituía un ingreso sin causa por no haber aplicado el ajuste por inflación.

En forma preliminar, desestimó el planteo de la demandada referido a que la acción para repetir el IG pagado habría prescripto.

Al respecto, destacó que no era razonable que la prescripción de la acción de repetición de un pago a cuenta o anticipo comience antes del curso de la prescripción de la acción para repetir el tributo al cual corresponde, porque existiría allí una imposibilidad jurídica para ejercitar la acción

En esas condiciones, señaló que el plazo de prescripción de la acción para repetir la suma reclamada en autos correspondientes al período fiscal 2012, comenzó a correr el 01/01/14, operando su término el 31 /12/18, por lo que a la fecha de



presentación del reclamo en sede administrativa (02/07/18) la prescripción no había acaecido.

Para resolver el fondo del asunto citó la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Candy” (Fallos: 332:1571) y basó sus fundamentos en la pericia contable practicada.

Sostuvo que debía tenerse como referencia el resultado neto ajustado por inflación calculado por la perito designada en autos, el cual ascendía al valor de \$150.458.317,55 y, en consecuencia, correspondía desestimar el resultado neto determinado por la contribuyente.

En virtud de esos datos, la profesional contable indicó que entre el impuesto determinado (\$52.660.411,14), y el impuesto ingresado oportunamente (\$62.117.654,70), existía una diferencia de \$9.457.243,60.

Por otra parte, agregó que del peritaje surgía que el impuesto ingresado por la contribuyente representó, respecto al resultado neto ajustado en el informe pericial (\$150.458.317,55), una alícuota efectiva del 41,28%, por lo que se evidenciaba que ese porcentaje superaba a la alícuota del 35% establecida por la LIG.

Tras recordar que la pericia había sido impugnada, desestimó las críticas de la contribuyente por no resultar suficiente sus dichos para desvirtuar las conclusiones expuestas en el informe producido teniendo en cuenta que la falta de documentación a la que aludió el experto, pese a haber sido requerida por el Fisco Nacional, tampoco fue presentada en el marco de las actuaciones administrativas iniciadas por el reclamo administrativo previo de repetición incoado oportunamente.

En relación con los intereses, declaró la inconstitucionalidad del art. 4° de la resolución 314/04, del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, y estableció que esos accesorios debían ser liquidados desde el momento de formularse el reclamo previo de repetición (02/07/18) a la tasa de interés pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (Comunicación N° 14.290); y a partir del 1/08/19 a las tasas previstas en las resoluciones (MH) 598/2019, 559/22 y 3/24 según su vigencia.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

CAF 4560/2021: “BRIDGESTONE ARGENTINA SAIC c/ EN-AFIP s/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA”

Por último, impuso las costas a la demandada vencida.

2º) Que, contra ese pronunciamiento, ambas partes interpusieron recursos de apelación, que fueron concedidos libremente (v. escritos y proveídos del 18 y 24 de junio de 2024).

Puestos los autos en la Oficina, fundaron sus recursos (v. escritos del 26 y 27 de septiembre de 2024), que fueron replicados recíprocamente.

El 3/10/2024, se pronunció el señor Fiscal General.

3º) Que la accionante cuestiona únicamente la tasa de interés aplicada.

4º) Que, por su parte, la DGI se queja de:

(i) El rechazo de la defensa de prescripción. Explica que la contribuyente había cancelado los anticipos Nros. 1 a 7 por la suma total de \$2.326.850,82 durante el transcurso del año 2012 (con anterioridad al vencimiento del período fiscal), de modo que a su respecto la prescripción comenzó a correr el 01/01/2013 y su curso se cumplió el 31/12/2017; por lo cual, teniendo en cuenta la fecha de interposición del reclamo — 02/07/2018- la posibilidad de repetir tales anticipos, se encontraba legalmente prescripta.

En ese sentido, transcribe las disposiciones de los arts. 56 y 61 de la ley 11.683 y sostiene que los anticipos abonados con anterioridad al 31/12/2012 se encuentran prescriptos a los fines de su repetición.

(ii) La errónea interpretación de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Dice que en el caso de autos, no existe un supuesto de confiscatoriedad de impuesto, dado que existen sustanciales diferencias con el precedente “Candy” y similares, como por ejemplo el porcentaje que representa el importe del impuesto.



Afirma que lo resuelto en esos fallos es particular para aquéllos, y eso no implica que la suspensión de la aplicación del mecanismo del ajuste por inflación haya dejado de existir, ni siquiera para esos contribuyentes respecto de los cuales recayó sentencia a su favor, por ello, la decisión de la Corte Suprema no puede ser equiparable a una declaración de inconstitucionalidad generalizada a todo el resto de los contribuyentes.

Hace hincapié en la necesidad de prueba concluyente sobre la confiscatoriedad, lo que asegura no ocurre en autos.

(iii) Respecto de la tasa de interés fijada hasta el 31 de julio de 2019, y dice que para su cálculo se debió aplicar lo previsto por el art. 179 de la ley 11.683 y la resolución 314/04 dictadas por el Ministerio de Economía.

(iv) La imposición de costas íntegramente a su cargo.

(v) Para el caso de que se confirme la sentencia, pide que se declare que los importes reconocidos en autos deben ser solicitados mediante el procedimiento previsto por la resolución general 2224/79 y sus modificatorias.

5º) Que, ante todo, cabe recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino solamente aquéllos que estimen pertinentes para la solución del caso (conf. Fallos: 310:1835; 324:3421; 326:4675; 329:1951 y esta Sala, CAF 57.427/2016 “BBVA Banco Francés SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 27/4/2021 y sus citas, entre muchas otras).

6º) Que, respecto del planteo de la AFIP-DGI referido al rechazo de la prescripción de la acción para repetir los anticipos Nros. 1 a 7 durante el transcurso del año 2012, corresponde hacer algunas aclaraciones.

En autos está fuera de controversia que el término de prescripción es de cinco años (art. 56 LPT), pues el tema que se discute en esta instancia es si el plazo de prescripción comenzó a correr a partir del 1º de enero de 2013 (es decir, “*el 1º de*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

CAF 4560/2021: “BRIDGESTONE ARGENTINA SAIC c/ EN-AFIP s/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA”

enero siguiente en que venció el período fiscal”, conforme art. 61 de la ley 11.683) o, tal como lo sostienen la actora y la sentencia de grado, a partir del 1º de enero de 2014, porque la prescripción de la acción de repetición de un pago a cuenta o anticipo no puede razonablemente comenzar antes del curso de la prescripción de la acción para repetir el tributo al cual corresponde y porque existiría una imposibilidad jurídica para ejercitar la acción.

Ahora bien, en este punto cabe precisar que, contrariamente a lo que sostiene la demandada, en autos la actora no persigue la repetición de anticipos individuales, sino que intenta repetir el IG correspondiente al ejercicio 2012 ingresado en exceso por no haberse aplicado el mecanismo de ajuste por inflación pretendido por la actora, y la acción para reclamarlo resultó expedita recién cuando presentó la correspondiente declaración jurada del IG en mayo de 2013, toda vez que hasta ese momento carecía de la posibilidad lógica y razonable de conocer la existencia del derecho en que funda su pretensión.

Es precisamente esta circunstancia la que torna aplicable el art. 61 de la LPT, en cuanto refiere al cómputo del plazo de prescripción relativo a pagos o ingresos de un período fiscal ya vencido, toda vez que la actora –cabe reiterar– estuvo en condiciones de advertir la alegada confiscatoriedad, y por ende, que realizó pagos en exceso, una vez que efectuó a la liquidación final del gravamen después del vencimiento del período fiscal 2012.

De ese modo, la debida comprensión del objeto reclamado en la causa impide considerar que se reclama la repetición en forma individual y de manera aislada de determinados anticipos, sin desconocer sus características (conf. doctrina de Fallos: 285:177; 303:1496; 303:1500 y 308:919, entre otros; y esta sala en la causa 55092/2017 “Exterran Argentina SRL c/ EN - AFIP - DGI s/ dirección general impositiva”, sent. del 15/07/2021, sentencia que quedó firme habida cuenta que la Corte Suprema de la Nación declaró inadmisibile el recurso extraordinario interpuesto) y, en función de las particularidades de la acción que se intenta, resulta razonable considerar que el plazo de cinco años previsto por el art. 56 de la LPT recién comenzó a correr a partir del 1º de enero de 2014.



Consecuentemente, toda vez que desde la fecha recién indicada y hasta que se presentó el pertinente reclamo en sede administrativa (2 de julio de 2018) no transcurrió el plazo de prescripción, corresponde confirmar lo decidido en este aspecto por la sentencia de grado, con arreglo a los fundamentos supra desarrollados.

7º) Que, sentado lo expuesto, en cuanto al fondo de la cuestión, también es preciso destacar que esta Cámara ha admitido que las normas que suspenden el ajuste impositivo por inflación pueden provocar efectos confiscatorios respecto de ciertos contribuyentes para el IG, en la medida en que logren acreditar los extremos que tuvo en cuenta el Máximo Tribunal en el precedente “Candy” (Fallos: 332:1571; y esta Sala, causas 23.181/2009 “Klockmetal SA c/ EN-AFIP DGI-Resol 8/09 (DV CRR2) Período 2002 s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 19/12/2013; 11.373/08 “Bodegas Chandon SA c/ EN-AFIP DGI-Período 2002-2003 s/ DGI”, sent. del 9/06/2011; 19.279/03 “Montevideo Cambio y Turismo SA c/ PEN-AFIP DGI s/ proceso de conocimiento”, sent. del 20/05/2010; 174.116/2002 “H. Engelman SAICFEI c/ EN-Mº Economía-AFIP s/ proceso de conocimiento”, sent. del 27/04/2010; 2573/08 “M. Royo SACIFyFC c/ EN-AFIP Resol 3/08 s/ Dirección General Impositiva” y su agregado causa 10.678/09 “M. Royo SACIIFyFC c/ EN-AFIP DGI- Resol 13/09 s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 1º/09/2018, entre muchos otros).

8º) Que, en atención a los cuestionamientos en torno a las probanzas de la causa y su valoración corresponde efectuar una breve reseña de la actividad pericial.

En punto al ejercicio fiscal involucrado, en lo que aquí interesa, la experta detalló que el resultado impositivo histórico (sin aplicación del mecanismo de ajuste por inflación) era del importe de \$177.479.013,38 y, luego de aplicar el citado mecanismo, señaló que el resultado impositivo era de \$150.458.317,55. (v. respuesta al punto e solicitado por la actora).

Explicó que si bien el determinado por la contribuyente ascendía a la suma de \$119.109.226,40, la diferencia de montos radicaba en la ausencia de documentación respaldatoria que permita efectuar la anticuación de las partidas, dato necesario para el cálculo del ajuste por inflación dinámico.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

CAF 4560/2021: “BRIDGESTONE ARGENTINA SAIC c/ EN-AFIP s/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA”

En efecto, informó que “...se ha solicitado la documentación respaldatoria, solicitando facturas o documento equivalente, registraciones en libro compras la empresa, o cualquier otra documentación contable que permitiera identificar el bien, tanto en su naturaleza, como en la fecha de incorporación como bien de uso. La empresa no exhibió ninguna documentación al respecto” (v. respuesta al punto k requerido por la accionante).

Agregó, en punto al revalúo impositivo de bienes de uso que tal “... como lo relato en el punto K) de la actora y el punto 5) de la demanda la empresa no me exhibió documentación alguna que permita efectuar la anticuación (sic) de las partidas incluidas en el rubro bienes de uso, y sujetas a amortización, por consiguiente, no he reunido elementos de juicio suficientes para efectuar el cálculo requerido en este punto. En consecuencia, el único importe que se ha podido validar con documentación de la empresa en esta pericia fue el correspondiente a ajuste por inflación estático negativo (\$ 27.020.695,83)” (v. respuesta al punto f, ítem 4, de los pedidos por la actora).

En virtud de esos señalamientos la contadora tomó el resultado impositivo neto ajustado por inflación (\$150.458.317,55) y concluyó que el impuesto ingresado por la contribuyente representó una alícuota efectiva del 41,28% (v. respuesta al punto g de la actora).

Finalmente, en lo que aquí interesa, la perito determinó el IG en \$52.660.411,14 y teniendo en cuenta que el impuesto ingresado oportunamente por la contribuyente era de \$62.117.654,70), señaló que existía una diferencia de \$9.457.243,60 (v. respuesta al punto f de BAS).

Al respecto, es del caso resaltar que la demandada sostuvo en su expresión de agravios que, de los propios datos del peritaje, quedó demostrado que la tasa efectiva de incidencia del gravamen de no aplicarse el ajuste previsto en el Título VI de la LIG, respecto del resultado neto impositivo que se obtendría con la aplicación de dicho ajuste resulta inferior al 62% que arrojó “Candy” (v. escrito del 27/09/2024).

Por su parte, con relación a la falta de documentación, BAS hizo saber que si bien por la antigüedad de los comprobantes solicitados por la experta no se encontraba obligado a conservar, en los términos del art. 33 de la ley 11.683; a su vez la información solicitada surgía clara de los libros IVA (v. escrito del 28/06/2023).

La perito contadora contestó los traslados pertinentes manteniendo su informe inicial.



9º) Que, es del caso recordar que la pericia consiste en una actividad tendiente a dar luz sobre un hecho mediante el conocimiento de ciencias o técnicas especiales. Esta actividad se lleva a cabo en virtud de una decisión judicial, por personas especialmente calificadas, distintas de las partes y del juez del proceso, que le suministran argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de las gentes (conf. Falcón, Enrique M., *Tratado de la Prueba*, tomo II, 1.ª ed. revisada, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2022, p. 693, con cita de Devis Echandía).

En términos similares, el Alto Tribunal tiene dicho que dada la íntima relación entre la función jurisdiccional y el auxilio especializado, cuando sea necesario efectuar comprobaciones especializadas en juicio, las llevarán a cabo profesionales habilitados, quienes transmitirán al juez su opinión y deducciones y, al hacerlo, le suministrarán argumentos o razones para la formación de su convencimiento con relación a temas cuya aprehensión vaya más allá de la ciencia jurídica, viniendo así a completar el conocimiento del juez en materias que escapen a su formación (Fallos: 339:542).

Con relación a la fuerza probatoria del dictamen pericial, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que el juez tomará en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formulados por los consultores técnicos o los letrados, conforme los arts. 473 y 474 y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca (art. 477).

De manera que, si bien en nuestro sistema la prueba pericial no reviste, en principio, el carácter de prueba legal vinculante (Fallos: 342:824; 345:801), cabe reconocer validez a las conclusiones de los peritos para la decisión de aspectos que requieren apreciaciones específicas de su saber técnico, de las que sólo cabría apartarse ante la evidencia de errores manifiestos o insuficiencia de conocimientos científicos (Fallos: 340:991; 341:180, entre muchos otros).

Como forma de conjugar ambos principios, se ha dicho que el cuestionamiento de un trabajo realizado por un profesional de una determinada rama del saber requiere necesariamente que se señale cuáles son los hechos inexactos en que se fundó y cuáles los errores científicos en los que el perito ha incurrido (esta Sala, causa 27994/06, “Beltrán, Eduardo Alberto c/ EN-Jefatura II Inteligencia- Resol 4-V-09 [Exp





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

CAF 4560/2021: “BRIDGESTONE ARGENTINA SAIC c/ EN-AFIP s/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA”

22831/05-5] s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, sent. del 21/2/2017; Sala II, “Arias, Fulgencio y otros c/ Dirección General de Fabricaciones Militares s/ empleo público”, sent. del 18/3/2010 y Sala III, “Pear SRL c/ YPF SA s/ EN [M° Economía] s/ contrato administrativo”, sent. del 7/7/99, entre otros).

10) Que, sobre la base de tales pautas interpretativas, en su concreta aplicación al caso de autos, cabe señalar que la perito contadora procedió a contestar cada una de las impugnaciones y observaciones realizadas con fundamentos, circunstancia que fue debidamente tenida en cuenta por el primer juzgador (v. cons. XI de la sentencia).

Por lo demás, se observa que si bien las partes no concuerdan con las consecuencias que se extraen del peritaje, lo cierto es que consintieron los montos que informó la profesional.

En virtud de ello, atento que la apelante no demuestra que la experta haya efectuado una inadecuada o incompleta valoración de los rubros en cuestión, sino, muy por el contrario, se aprecia un trabajo completo y de alta calidad y claridad sobre una cuestión compleja, incluso con la intervención de los consultores técnicos de ambas partes (v. encabezado de la pericia presentada el 5.06.2023), se deben desestimar las quejas de la AFIP-DGI.

Máxime, si se advierte que los cuestionamientos sobre los puntos de la pericia fueron debidamente esclarecidos, y constituyen meras discrepancias que carecen de un adecuado desarrollo argumental y que no logran rebatir en forma adecuada y pormenorizada las conclusiones de la perito.

Asimismo, el consultor técnico de la demandada no ha presentado un informe que haya arrimado al *a quo* las debidas y pertinentes conclusiones sobre la materia debatida en autos.

En consecuencia, toda vez que no se observa que las objeciones del ente fiscal logren demostrar el error incurrido, y atento a que la prudencia aconseja aceptar los resultados del peritaje siempre que no exhiban errores manifiestos, insuficiencia de conocimientos científicos o no resulten contradichos por otra prueba de igual o parejo tenor (Fallos: 320:326, entre otros), corresponde confirmar la sentencia recurrida en tanto se fundó en las conclusiones del peritaje para considerar probada la alegada confiscatoriedad y resolver la pretensión de manera favorable.



11) Que, con relación al agravio relativo a que el porcentaje que representa el ajuste por inflación en autos resulta inferior al considerado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Candy”, cabe agregar que esta Cámara ha precisado que la ausencia de coincidencia con los porcentajes estipulados en ese caso no obsta a la aplicación de su doctrina en supuestos con cifras menores, con fundamento en la noción —invocada por el propio precedente de la Corte Suprema— de la magnitud en la desproporción entre las sumas.

Así, se ha sostenido que, *“en la medida en que la alícuota prevista en la ley del gravamen es del 35%, un porcentaje superior —en principio— redundaría en un supuesto de confiscatoriedad en los términos que ha sido definida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación haciendo aplicación de los arts. 17 y 19 de la Constitución Nacional”* (cfr. esta Sala, “Paolini Hnos. S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 1.06.2021; en sentido concordante, Sala II, “Central Piedra Buena S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 16.07.2015; y Sala III, “Paolini Hnos. S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 24.04.2018).

Asimismo, debe señalarse que las críticas esbozadas sobre el efecto de la actualización por inflación de las amortizaciones impositivas no se condicen con los elementos probatorios recopilados en el expediente, pues el porcentaje que representa el importe del impuesto aplicando el mecanismo de ajuste por inflación impositivo del Título VI de la LIG asciende al 41,28%, es decir, está por encima de la tasa estatutaria del impuesto a las ganancias 35% generándose así un resultado confiscatorio por absorber una parte importante de la renta (esta Sala “BBVA Banco Francés S.A.”, ya cit.).

A mayor abundamiento, cabe agregar que el criterio sostenido por esta sala sobre la actualización de amortizaciones ha sido admitido por el Alto tribunal al rechazar el recurso extraordinario y la queja deducida por su denegación parcial (conf. resol. del 11.07.2023 en la causa “BBVA Banco Francés S.A.”).

12) Que, por su parte, no está de más destacar, que lo resuelto no obsta la posibilidad con que cuenta el ente de ejercer las facultades de verificación y fiscalización que le competen en los términos de lo establecido en la ley 11.683.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

CAF 4560/2021: “BRIDGESTONE ARGENTINA SAIC c/ EN-AFIP s/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA”

13) Que, despejados estos temas, corresponde adelantar que tampoco resultan procedentes los cuestionamiento concernientes de la tasa pasiva fijada por la sentencia de grado.

Vale aclarar que la parte actora planteó la inconstitucionalidad de la resol. 559/22 (MH) y requirió que se fije la establecida por el Banco Central de la República Argentina u otra de mercado que se considere apropiada a las presentes circunstancias y, por el contrario, la demandada solicitó que se aplique la prevista por la resolución 314/04 del Ministerio de Economía.

En punto al planteo de la accionante, cabe advertir que el planteo fue introducido de manera tardía. Sabido es que las cuestiones constitucionales deben plantearse en la primera oportunidad posible en el curso del proceso, exigencia que tiene por objeto que el tema de agravio sea sometido a las instancias ordinarias y debatido en ellas (Fallos: 297:285, 298:368, 302:346, 316:64, 339:463, 334:365, entre otros).

En el caso, la resolución (ME) 559/22 fue publicada el 25/8/2022 y pese a ello la actora recién introdujo el planteo de inconstitucionalidad al expresar agravios ante esta alzada. De este modo, se vislumbra que entre su entrada en vigor y el posterior planteo de inconstitucionalidad, la accionante efectuó diversas presentaciones para impulsar el proceso sin exponer, en ninguna de ellas, un argumento tocante a la constitucionalidad de ese reglamento.

Respecto del planteo de la demandada, corresponde adelantar que ello no resulta procedente, atento a que este Tribunal se expidió sobre la inconstitucionalidad de la tasa de interés allí fijada y también sobre las modificaciones introducida por la resolución 598/2019 del Ministerio de Hacienda, en las causas 68476/2018/CA1 “Maselis, Analía Edith c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, 4195/13 “Saguimo SA c/ EN-AFIP-DGI- Resol 1/13 s/ Dirección General Impositiva”; 58523/12 “Frigoríficos Lamar SA c/ EN-AFIP-DGI- Resol 86/12 (LGCN) s/ Dirección General Impositiva”, sents. del 2/03/2019, 04/2/2020 y 22/12/2020, respectivamente, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.

Cabe destacar, asimismo, que los dos primeros fallos han quedado firmes, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los recursos extraordinarios que se dedujeron contra ellos (v. sentencias del 22/12/20 y el 15/04/2021).



No obstante, es necesario recordar que por resolución 598/2019 (B.O. 18/07/19), el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo que expuso como fundamento para su dictado, entendió necesario modificar las tasas de interés aplicables a los casos en los que asiste el derecho de los contribuyentes a percibir sumas por parte del organismo recaudador y tomar como referencia la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina.

Consecuentemente, derogó la resolución ME 314/04. Puntualmente, dispuso que “... *la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en el artículo 179 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la citada ley y a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 del Código Aduanero, vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual surgida de considerar la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina para el período de treinta (30) días finalizado el veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre. Cuando se trate de conceptos expresados en dólares estadounidenses, la tasa de interés aplicable será del cero como veinte por ciento (0,20%) mensual*” (art. 4º).

De modo que, por aplicación de los precedentes citados, se debe confirmar la decisión del a quo de aplicar la tasa de interés pasiva promedio que publica el BCRA (conf. Comunicado nº 14.290) hasta el 30/07/2019 y, a partir del 01/08/2019, las tasas previstas en las resoluciones (MH) 598/2019, 559/22 y 3/24 según su vigencia, todo ello hasta el efectivo pago.

14) Que, finalmente, en lo que concierne a las manifestaciones de la demandada respecto del procedimiento de la resolución general AFIP 2224/79, cabe destacar que su art. 1º prevé: “[l]as devoluciones de pagos o ingresos en exceso **podrán solicitarse** cuando los saldos acreedores emerjan de determinaciones de oficio, de declaraciones juradas primitivas o rectificativas, siempre que estas últimas disminuyan el saldo acreedor establecido en las primeras o que dichos saldos hayan sido considerados de libre disponibilidad o que se asimilen a tales. Asimismo, serán considerados los saldos que surjan de resoluciones administrativas o judiciales dictadas en recursos de repetición y declaraciones juradas rectificativas conformadas por esta Dirección”.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

CAF 4560/2021: “BRIDGESTONE ARGENTINA SAIC c/ EN-AFIP s/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA”

Al respecto, el Tribunal ha resuelto que, atento al modo en que fue redactada (ver resaltado que no corresponde al texto), la referida norma no es de obligatoria aplicación al caso. Por lo demás, carecería de razonabilidad imponer a la actora la obligación de someterse a un nuevo procedimiento administrativa toda vez que ha resultado vencedora en la contienda judicial y la ley 23.982 prevé el modo en que se deben cumplir las sentencias condenatorias contra el Estado Nacional (confr. causas “Autopista del Sol SA c/ EN-AFIP-DGI- Resol. 102/03 s/ Dirección General Impositiva” y 47831/10 “Central Térmica Loma de la Lata Sociedad Anónima c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva”, sents. del 1º/10/13 y 25/08/16, respectivamente; y, recientemente, causa “Banco Francés SA”, cit. precedentemente).

15) Que, toda vez que no se advierten motivos suficientes para apartarse del principio general que consagra el art. 68 del CPCCN, corresponde confirmar la imposición de las costas a la demandada vencida y establecer del mismo modo las de alzada.

Por las consideraciones expuestas, voto y propongo al acuerdo: Rechazar los recursos interpuestos y confirmar la sentencia apelada. Con costas de esta alzada a la demandada vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

Los señores jueces de Cámara Marcelo Daniel Duffy y Jorge Eduardo Morán adhirieron al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: Rechazar los recursos interpuestos y confirmar la sentencia apelada. Con costas de esta alzada a la demandada vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

Regístrese, notifíquese a las partes y al Fiscalía General y, oportunamente, devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY



JORGE EDUARDO MORÁN

ROGELIO W. VINCENTI

